

Informe político de la Coordinadora de IULV-CA

Impulso de la XXIII Asamblea

Este informe debe comenzar felicitando a toda la militancia de IULV-CA por el proceso asambleario culminado el 17 y 18 de julio. Fue un ejemplo de participación, de capacidad de construir consensos y de impulso del proyecto. A las ideas y propuestas realizadas se sumó un enorme entusiasmo y cariño de tantas y tantos que pudieron encontrarse presencialmente después de muchos meses de contacto telemático. De la estrategia aprobada en la Asamblea cabe destacar, sin menoscabo de todos los demás, tres elementos muy oportunos para el inicio de curso político.

Primero, nos emplazamos a vigorizar la militancia. IULV-CA es un espacio militante. Las bases de IULV-CA deben recuperar su papel en el tejido social y tenemos que seguir avanzando en nuestro carácter de movimiento político y social. Segundo, el despliegue de Unidas Podemos por Andalucía con el impulso de planes de trabajo y de espacios de coordinación y deliberación es impostergable. Precisamos alcanzar velocidad de crucero para estar bien preparados ante el venidero ciclo electoral (elecciones andaluzas, municipales y generales).

Tercero, siendo fieles a las razones fundacionales de Convocatoria por Andalucía y queriendo estar a la altura del actual momento histórico, nos comprometemos a poner todo de nuestra parte para sumar a toda la izquierda social andaluza para transformar Andalucía y echar a las derechas reaccionarias de los gobiernos municipales y andaluz.

Meses cruciales para el futuro del gobierno de coalición

El gobierno central entra en otra fase, con un escenario de *normalidad* postpandémica y con unas encuestas que exhiben falta de entusiasmo en el electorado de izquierdas. Su devenir –y en cierta forma, el de las fuerzas coaligadas-



2 de octubre de 2021

se juega en los próximos meses. El papel de las organizaciones políticas de izquierda es fundamental para incidir en un proceso que no solo se determina en el plano institucional. Ni mucho menos solo en el Consejo de Ministros. Es por esto que la movilización social debe ser nuestra prioridad: incidir desde la calle en un cambio en la correlación de fuerzas. Una movilización social con distintas expresiones pero con objetivos claros: reforzar el tejido social, insertar en la agenda pública las soluciones a los problemas reales de la gente, empujar al gobierno central para el cumplimiento del acuerdo y atraer al electorado de izquierdas desmotivado. Los PGE son una oportunidad propicia para ello: movilizar en los territorios en torno a propuestas concretas, dar fuerza a UP en la negociación y colocar debates en la agenda pública. Unos PGE que deben cumplir con Andalucía y ser exponente de un proyecto de país para las mayorías sociales. Para eso, desde Unidas Podemos por Andalucía estamos trabajando sobre propuestas concretas que responden a diez ejes estratégicos:

1. Inversión del 18%, acorde al peso poblacional de Andalucía
2. Aumento de la dotación en políticas sociales
3. Impulso de las infraestructuras ferroviarias
4. Plan de transformación industrial extraordinario para Andalucía
5. Plan de rehabilitación de edificios públicos
6. Plan de empleo extraordinario
7. Plan de protección medioambiental y saneamiento
8. Plan de lucha contra la brecha social y la pobreza
9. Protección de la agricultura
10. Desarrollo del mundo rural y de las ciudades medias.

La mejora en las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora es ineludible para que la experiencia de UP en el gobierno sea percibida como provechosa por el electorado progresista. Ese objetivo es primordial, máxime con la subida del IPC cerca de un 4% y el consiguiente impacto en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Apelamos a dar la batalla cultural y a la movilización social conocedores de las dificultades. La batalla cultural y el debate político se están librando en un contexto



2 de octubre de 2021

muy adverso. Las corporaciones de la industria de la comunicación están dando hueco a la extrema derecha mientras excluyen progresivamente a la izquierda. Hay una marginación de las posiciones de nuestro espacio político, incluso, en los entes públicos. Además de esta ofensiva mediática de la oposición, las fuerzas conservadoras y reaccionarias están dando la batalla sirviéndose de las instituciones del Estado (véase el CGPJ o el Banco de España) y desde los consejos de administración de grandes empresas (véase la ofensiva del oligopolio eléctrico).

Gobierno andaluz: mucha propaganda y agenda neoliberal

El papel de Andalucía en el ciclo electoral venidero es crucial. Inaugura un ciclo en el que nos jugamos la orientación de la salida a la crisis de régimen, entre la revuelta reaccionaria y la profundización democrática, así como la articulación de la izquierda en el poder municipal. Mucho se ha especulado sobre un adelanto electoral en Andalucía, algo que no parece probable en un horizonte inmediato. Detrás de dicha especulación han operado dos intereses, los propios del PP-A, necesitado de desviar la atención sobre su pésima gestión, y los de la dirección nacional del PP, faltada de dar un balón de oxígeno a Casado con una hipotética victoria electoral. Se celebren las andaluzas cuando se celebren, está clara cuál es la estrategia de Moreno Bonilla: confrontar con el gobierno central, dar imagen de moderación “centrándose” entre la oposición y VOX, e identificar los intereses de Andalucía con su figura.

Para este último objetivo se sirve de la ineludible reforma del sistema de financiación autonómica. No obstante, la pretendida imagen que el gobierno andaluz quiere dar de defensor de Andalucía choca con sus intenciones reales. La infrafinanciación de nuestra tierra y sus necesidades estructurales quedaron diagnosticadas en el acuerdo parlamentario de 2018. Coherentemente, dicho acuerdo apuesta por una reforma del sistema que aumente la recaudación fiscal, blinde los servicios públicos con un suelo de financiación y evite la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Muy al contrario, el Partido Popular aprobó una reforma fiscal, y tiene otra en cartera, que ha dado privilegios a las grandes



fortunas a costa del erario público; destina recursos al sistema educativo y sanitario privados, en detrimento del reforzamiento de los servicios públicos; y aplaude el dumping fiscal ejercido por la Comunidad de Madrid.

Los problemas de Andalucía siguen sin acometerse por el gobierno andaluz. En este inicio de curso escolar ha destacado la eliminación de 4000 plazas públicas, el despido de 2700 profesores y la entrada de fondos de inversión en la formación profesional. Deterioro y privatización encubierta: misma fórmula que en el sistema sanitario. Hay una indignación generalizada en la ciudadanía y entre los profesionales sanitarios por la falta de recursos en el sistema sanitario público, siendo especialmente doloso en la atención primaria, en el abandono del servicio en el medio rural y en las listas de espera para especialidades u operaciones. El derecho a la salud se está vulnerando de facto. No es casualidad que estén aumentando las externalizaciones de servicios a clínicas privadas y que Andalucía, junto con Madrid, sea la CCAA en la que más ha crecido el número de usuarios del sistema sanitario privado. Se hace caja con un derecho. Por esto hay que valorar muy positivamente la movilización en el medio rural por el reforzamiento del sistema sanitario. Las marchas que están aconteciendo en la provincia de Sevilla, como ya ocurrió en Córdoba, Cádiz y Málaga, son un ejemplo de cómo plantar cara al deterioro del sistema público y de cómo cerrar el paso a la ultraderecha en el medio rural.

También es reseñable en este inicio de curso la irresponsable inacción del gobierno andaluz frente al cambio climático. Andalucía es una de las regiones europeas que más está sufriendo el calentamiento global y la escasez de lluvias. La desertificación avanza y pone en riesgo uno de nuestros medios de vida: el sector agroganadero. Los niveles de agua de los pantanos son preocupantes y la sobreexplotación de acuíferos insostenible. Por el contrario, no se toman medidas e, incluso, se apuesta por redundar en la depredación medioambiental para recuperar “crecimiento económico”. La ley del suelo es un ejemplo y, en esta línea, la desprotección del medio natural. Véase la negativa del gobierno andaluz a declarar paisaje protegido a la zona de Castilnovo (Conil) a pesar del apoyo municipal y ciudadano o la apuesta por un macro proyecto urbanístico en Barbate. Ese modelo encuentra resistencia social y respuesta ciudadana. Se están sucediendo las protestas contra la



invasión de huertos solares en perjuicio del paisaje y de la actividad agraria. Sufrimos las consecuencias del pelotazo urbanístico de décadas pasadas y hay mayor conciencia ciudadana. Así se ha visto con el incendio, de sexta generación, ocurrido en Sierra Bermeja. Ha quedado en evidencia la obsoleta e insuficiente gestión de un problema creciente: los incendios en el medio rural. No es suficiente con aprobar planes preventivos de incendios, hace falta una política integral contra el cambio climático que afronte el abandono del medio rural y la despoblación; la recuperación de terrenos para la agricultura sostenible y extensiva; y la dotación conveniente de medios técnicos y humanos de prevención y extinción de incendios (INFOCA) subordinados ahora a una gran temporalidad, con el descuido consiguiente del monte.

El gobierno andaluz no tiene entre sus prioridades la política social. La infrafinanciación del servicio de atención a la Dependencia mantiene en condiciones de precariedad a las trabajadoras y trabajadores del sector. La Consejería de Igualdad no fiscaliza a las empresas concesionarias, que mantienen a sus plantillas en condiciones indignas, con el consiguiente impacto añadido en la calidad del servicio. Hay una absoluta dejadez del gobierno andaluz en políticas sociales que también se expresa en la falta de desarrollo de la ley de servicios sociales.

Los presupuestos de la JUNTA deberían servir para afrontar estos problemas, deterioro de los servicios públicos y cambio climático, y otros igualmente impostergables, como la creación de empleo estable y el cambio de modelo productivo. Tenemos una oportunidad histórica para que los PJA acometan cambios estructurales que condicionen las próximas décadas. Concurren dos factores propicios para ello: aumento exponencial de las transferencias a Andalucía con fondos europeos y conciencia generalizada entre la ciudadanía de que hay que cambiar el modelo productivo hacia otro menos dependiente del turismo, sostenible medioambientalmente y que combata la despoblación del medio rural. El gran freno a este cambio histórico posible es el enclaustramiento del gobierno andaluz en la ortodoxia neoliberal. La receta del Partido Popular calca el modelo fracasado iniciado por Esperanza Aguirre y continuado por Ayuso: bajada de impuestos (a las grandes fortunas principalmente), privatizaciones encubiertas, dar facilidades al



2 de octubre de 2021

desarrollo urbanístico a costa del medio natural y abrir la puerta a los fondos de inversión para que se hagan con los sectores económicos. Creemos que el proceso de diálogo en torno a los presupuestos andaluces entre el gobierno andaluz y los grupos parlamentarios debe conducir a una rectificación de las políticas fracasadas y a un nuevo marco con consensos ineludibles para el reforzamiento de los servicios públicos, políticas fiscales justas y políticas económicas coherentes con la creación de empleo de calidad y lucha frente al cambio climático.

Hace falta un revulsivo que haga frente a la resignación de parte del electorado progresista, que desenmascare la falsa moderación de Moreno Bonilla y que ilusione a la mayoría social en torno a un programa de transformación.

No tenemos tiempo que perder para levantar una alternativa a las derechas reaccionarias. En estos meses próximos nos jugamos sacar a las derechas del gobierno andaluz en las próximas elecciones autonómicas y mantener y extender el poder de la izquierda en el ámbito municipal. Por ello es fundamental desarrollar una estrategia desde Unidas Podemos por Andalucía para desplegar por todo el territorio la confluencia, ampliar las alianzas e impulsar la movilización social. Esto requiere acometer planes de trabajo estructurados en cuatro fases con sus correspondientes hitos y objetivos.

- a) Fase inicial, desde el 1 de octubre hasta el 4 de diciembre. En esta fase vamos a fortalecer organizativamente Unidas Podemos por Andalucía, constituir la comisión electoral de la confluencia y abordar una política de alianzas hacia otras fuerzas.
- b) Fase programática, desde el 7 de diciembre hasta el 28 de febrero. En esta fase vamos a acumular fuerzas y ampliar el espacio político y social desde la elaboración programática.
- c) Fase primarias, desde el 1 de marzo hasta el 14 de abril. Esta fase vamos a elegir a las personas candidatas de cada circunscripción provincial con procesos participativos.
- d) Fase electoral, desde el 14 de abril hasta la celebración de elecciones. En esta fase desarrollaremos la precampaña electoral y campaña electoral cuando se convoquen las elecciones.



2 de octubre de 2021

La pandemia ha dejado muy debilitado el tejido social y la capacidad de repuesta en la calle a las políticas neoliberales. Como se recordaba al inicio del informe, es tarea prioritaria la dinamización de las bases de IULV-CA y su inserción en los conflictos sociales y organizaciones populares. Hemos de ayudar a que sea un éxito las movilizaciones que están en marcha: las convocadas por el refuerzo de la sanidad pública, la reducción de listas de espera y la vuelta de la presencialidad en la atención primaria, con una cita importante el próximo 14 de octubre en Sevilla; la convocada por los sindicatos CCOO y UGT para una recuperación real para la mayoría social el 7 de octubre en Sevilla; las convocadas por el movimiento ecologista para exigir medidas urgentes frente al calentamiento global, control de los macroproyectos de placas solares y recuperación del lobo (esta última el 16 de octubre en Sevilla); las convocadas por el movimiento memorialista andaluz, con una cita principal el próximo 13 de noviembre en Sevilla; las que defienden el impulso al ferrocarril público, siendo la más importante el 14 de octubre en Sevilla; la manifestación por el sistema de pensiones público, el 16 de octubre en Madrid; y aquellas movilizaciones populares que exijan a las eléctricas la bajada del precio de la luz a las familias trabajadoras y pymes.